
Fernando Calderón G.
Compilador

Los movimientos sociales ante la crisis



Universidad
de las Naciones Unidas

GLACSO

Consejo
Latinoamericano
de Ciencias Sociales

IISUNAM

Instituto
de Investigaciones
Sociales
de la Universidad
Nacional Autónoma
de México

Los movimientos sociales
ante la crisis

Biblioteca de Ciencias Sociales
Directores: Mario R. dos Santos
y Cristina Micieli

Programa de Publicaciones
Asistente: Ariel Scher

I.S.B.N. 950-9231-14-4

Diseño Gráfico: Beatriz Burecovich y Viviana Barletta
Composición y armado: Ricardo Flaquer y Juan C. Eirín
Impresión: Artes Gráficas Santo Domingo
Santo Domingo 2739, Buenos Aires
Primera Edición: marzo de 1986
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Copyright de todas las ediciones en español por
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

E. Jelin, T. Dos Santos,
C. Figueira, R. Laserna,
L. Verdesoto, E. Ballón,
F. Rojas, L. Gómez,
G. Campero, D. Rivarola,
F. Calderón Gutiérrez.

Los movimientos sociales ante la crisis



Universidad
de las Naciones
Unidas

clacso
Consejo
Latinoamericano
de Ciencias
Sociales

IISUNAM
Instituto de
Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Los movimientos sociales, la crisis y la democracia en el Ecuador *

Luis Verdesoto Custode **

Introducción

Los casos incluidos en este trabajo son representativos de "lo nuevo" que está gestándose en la sociedad civil y de los cambios en los movimientos sociales con mayor profundidad histórica en el Ecuador. Los temas no son novedosos para América Latina, aunque sí lo es su articulación en la coyuntura de crisis y redemocratización. También el marco de

* De varios modos, este es un trabajo colectivo. Transcribe el sentido de las conclusiones del seminario realizado en CIUDAD en la última semana de enero de 1985, en el que participaron los investigadores invitados para el proyecto "Movimientos Sociales ante la crisis en América Latina". Los trabajos presentados fueron:

- "Crisis y movimiento sindical en el Ecuador: las huelgas nacionales del Frente Unitario de Trabajadores (1981-1983)" de Jorge León (CEDIME) y Juan Pablo Pérez (FLACSO);
- "La organización barrial entre la democracia y la crisis" de Mario Unda (CIUDAD);
- "Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador" de Mercedes Prieto (CEPLAES);
- "Movimientos sociales regionales en el Ecuador" de Simón Pachano (CIESE-IEE); y,
- "Crisis y movimiento campesino e indígena" de Manuel Chiriboga (FLACSO-CAAP).

Es colectivo también porque asume la "angustia" de los investigadores sociales preocupados por la crisis de los paradigmas tradicionales de la investigación y de la política, y por la falta de claridad en la prospectiva de la realidad social. La conceptualización de los movimientos sociales tampoco es, necesariamente, una salida global. Es un cambio en varias puertas de entrada y acentos de la investigación: permite revalorar el interior de las relaciones sociales y "releer" el poder, alejándose de perspectivas donde se lo reduce al Estado.

** Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Quito.

un Estado rentista, formas gubernamentales reformistas y autoritarias, y la persistencia de un crecimiento económico por la circulación del excedente petrolero.

El trabajo comienza por indagar la conformación del sistema político frente a la desestructuración del régimen oligárquico, la crisis, la instalación democrática y la situación actual. Luego plantea los antecedentes y la característica sobresaliente en la actualidad de los movimientos escogidos y otros no estudiados. Finalmente, se presentan los grandes temas que definen a los movimientos sociales.

El crecimiento industrial sustitutivo, la reforma agraria, la urbanización acelerada, la exportación de petróleo, la redefinición regional y la reconfiguración del mercado laboral son los grandes acontecimientos que acompañaron al cambio de sistema político y a la adopción estatal de nuevos roles. Por un lado, el Estado crea órdenes en la sociedad civil, particularmente ante la crisis. Por otro lado, la ruptura de la forma hacendaria de funcionamiento social, la crisis de representación y la transición a un sistema de partidos condiciona el acceso de los movimientos sociales a la política.

La democracia fue viabilizada por un nuevo centro del espectro político, el que aparece condicionado por la crisis para afrontar las iniciativas de la sociedad. Si bien aquella se interiorizó tardíamente en la economía, generó reacciones en los sectores subalternos y en los dominantes. Los sectores dominantes definieron una ofensiva política, en tanto los sectores subalternos plantearon una ofensiva social. El momento actual se caracteriza por el manejo estatal arbitrario de la legitimidad y por la ruptura de muchos acuerdos básicos del funcionamiento social.

La forma de lucha privilegiada por el movimiento sindical ha sido la huelga nacional de trabajadores, cuyas plataformas han transitado desde una posición "obrerista" hacia la inclusión de nuevos temas de corte "democrático" y "nacional", incluyendo en su convocatoria a un mayor número de sujetos sociales subalternos. El protagonismo político que alcanzó fue posible también por la crisis, pues ésta hizo que el acento en la distribución del excedente estatal se transformase en cuestionamientos oscilantes entre lo estratégico y lo reivindicativo, aunque sin amenazar la globalidad del poder instituido.

La educación en la lucha y la disputa de poder con el sistema institucional estuvieron condicionadas por la democracia. Más aun, la convocatoria electoral finalmente desplazó a la iniciativa sindical; situación condicionada por la percepción "instrumentalista" del Estado y por la ausencia de un discurso hacia la reproducción, espacio de referencia fundamental del comportamiento de los sectores populares.

Con el crecimiento reciente de las organizaciones de pobladores se registran tendencias innovadoras que redimensionan las necesidades populares en la crisis, la vinculación con el movimiento popular y las

tareas en el barrio y sus sujetos sociales. Comienza una disputa por la apropiación de la ciudad y por la iniciativa en la democracia. La organización se convierte en un valor referencial y el barrio en punto de encuentro de múltiples reivindicaciones.

La "invisibilidad" de la temática femenina comienza a ser atacada por una cantidad de organizaciones, que problematizan a la mujer desde todo el espectro político y desde el Estado. La disputa por la cuestión se ha iniciado y se perfilan sus variantes estratégicas: cooptación versus resistencia. La tarea es clara: constituir la identidad. El camino no lo es: asimilar lo femenino a las clases, incorporarlo al desarrollo o entenderlo como espacio de dominación particular. La crisis condiciona la formación de organizaciones: presiona por la inserción en el mercado laboral y por nuevas estrategias de supervivencia. También refuerza las formas opresivas domésticas y barriales. En este marco, las organizaciones son mediadoras entre lo público y lo privado y politizadoras de esto último.

La región aun es una categoría de difícil definición. Los movimientos sociales que aloja pueden ser tipologizados; una de las variables principales puede ser el carácter nacional de sus actores y el acceso al poder.

El movimiento campesino tiene una amplia trayectoria histórica, ampliamente investigada. Desde su etapa de constitución como presión abierta o asedio a los recursos de la hacienda hasta la actualidad de repliegue frente a la redistribución de la tierra, ha sufrido un proceso modernizador. Por un lado, el Estado constituyó varios sectores específicos en sus interlocutores y, simultáneamente, la crisis presiona por la recampesinización de la fuerza laboral. Por otro lado, su proceso organizativo tiene como tema fundamental la gestión productiva. Esta situación derivó en una relación flexible entre las organizaciones regionales y las federaciones campesinas, cada cual con su demanda específica. La organización campesina privilegia acciones tendientes a "limitar la diferenciación". Esta brecha se cierra en la práctica política en torno del poder local.

El movimiento étnico despliega formas distintas de entendimiento del Estado que surgen en la especificidad de su reivindicación: la autodeterminación es comprendida como reafirmación de la identidad y autosuficiencia económica. La territorialidad reconocida e infranqueable es su objetivo. Los movimientos campesino y étnico definen a sus enemigos en el plano local y perciben al Estado como asociaciones duales.

La crisis acentúa los desplazamientos de identidades de los sectores subalternos. No se trata de movimientos sociales que procesan una sola identidad, sino de una combinación de escenarios de lucha social que plantean su sentido estratégico. La definición paradigmática de la clase obrera es la primera en cuestionarse: su incapacidad para rearmar un apa-

rato productivo que no controla. Sin embargo, el sindicalismo permite la continuidad del movimiento social —desde el paro productivo a la huelga política— y finalmente se desplaza hacia la problemática espacial.

La representación del sindicalismo en la política está expuesta a la apelación de otras identidades. Empero no lo estructuran las ideas del socialismo o de la democracia sino la idea de "poder sindical".

La superposición de sistemas de contradicciones espaciales permiten mirar la conformación heterogénea del sindicalismo. La ciudad y el barrio son "subsistemas políticos" en los que se enfrentan el Estado como forma relativa del capital y el despliegue del mayor número de identidades de lo popular. La profundización del capitalismo a partir de la revitalización de actividades primario-exportadoras, la participación de los campesinos en la canasta básica y la acelerada urbanización, sin que esto implique la proletarianización estable y profunda, redefine la significación de lo productivo y de lo colectivo.

La penetración del Estado en la sociedad civil ordena a los movimientos: (re) conforma a los sujetos sociales; los vincula al capital; y tematiza a los sujetos. Los actores sociales, en tanto, tienen diferentes ópticas acerca del Estado. La crisis y la democracia han actuado imponiendo criterios al movimiento social. Especialmente la democracia, que actúa como código de las demandas y frontera de la legitimidad. Se distinguen varias posiciones de los sujetos frente a la legitimidad y su conquista. En unos casos, ésta actúa como límite para la demanda y, en otros casos, los movimientos la ensanchan.

Este trabajo termina cuestionando la pregunta sobre la universalidad o el particularismo de los movimientos sociales. Por un lado, se plantea que frente a la escisión no voluntaria entre el sistema partidario y los movimientos, los dos deben coexistir como formas de acceso a la política. Por otro lado, no se trata de encontrar un sector social reconstructor de una sociedad disgregada, sino de permitir que aflore toda la conflictividad subyacente en la sociedad "como paso previo al socialismo".

A. Crisis y democracia en el Ecuador contemporáneo

1. Hasta los años '60, la acumulación se basó en la exportación de banana y, secundariamente, de cacao y café. A diferencia de otros países de la región, no se introdujo una economía de enclave, aunque la dinámica de articulaciones sectorial y regional fue similar. Desde 1955 descendieron significativamente los precios de los productos exportados, lo que se tradujo en notables consecuencias económicas y sociales.¹ Desde entonces el Estado actúa claramente como agente de reconstitución de los espacios de rentabilidad para el capital y como generador de nuevas clases y fracciones. En los años siguientes tres fenómenos condicionaron a la

sociedad: la inducción de crecimiento industrial por sustitución de importaciones, la reforma agraria y la urbanización. Las modificaciones económicas y sociales que se incubaron en la década del sesenta, se aceleraron en la siguiente con la exportación petrolera. En los años '80, la crisis redimensiona el sentido de los cambios, ya que lleva a intentos reconstitutivos de la forma de la acumulación y de la penetración estatal en la sociedad.

La exportación de petróleo ecuatoriano no pesa en el mercado mundial. No obstante, la circulación interna de esta renta generó una dependencia umbilical con la acumulación. Desde 1972 a la actualidad las tasas de incremento del producto interno nos muestran dos momentos: un crecimiento sin precedentes que va hasta el año 1978 con una tasa promedio cercana al 9 % y la aparición de los primeros síntomas de crisis, que se manifestaron como desaceleración económica. La tasa de crecimiento promedio entre 1978 y 1982 fue de alrededor del 4 % anual hasta llegar a una tasa negativa en 1983. Se deduce la presencia tardía de la crisis internacional en relación con otros países de la región.

El crecimiento de la actividad industrial fue significativo: 10,6 % promedio durante 1972 y 1978 con una participación del 17 % en el PBI.² La base de la cual partió la industria fue débil y sólo pudo alcanzar esta dinámica con el fomento a la inversión basado en la circulación del excedente estatal, que es el ingrediente básico de la ganancia del sector. Del crecimiento industrial no puede deducirse el reordenamiento global del patrón de acumulación, ni la proletarianización masiva de la fuerza de trabajo, ni la constitución de un mercado interno dilatado. La dependencia hacia el sector externo de la economía se multiplicó en relación con su crecimiento; en 1976 el personal ocupado en la industria fabril era el 3,8 % de la PEA, la relación inversión/hombre ocupado permite prever un impacto cada vez menor en la generación de empleo; y la distribución del ingreso ensanchó fundamentalmente a los sectores medios en los que se basa la realización industrial.

La reforma agraria ha tenido dos fases. Una que va de 1964 hasta 1968 y otra desde 1970 hasta 1975. Alcanzó a un 10 % de la tierra agrícola y sus efectos fueron el reordenamiento de las estrategias productivas del capital en el campo y la reinserción de los campesinos en la economía. De los bienes de la canasta básica, el 62 % son producidos por campesinos. La gran propiedad, en tanto, se ha especializado en bienes de procesamiento agroindustrial y de exportación.³

La distribución de la población asentada en áreas urbanas y rurales ha cambiado en el último período intercensal. En 1974 el 58,6 % se encontraba en áreas rurales y en 1982 se asentó el 50,3 %. Existe una creciente urbanización de la economía y una asignación de roles cada vez más definidos a los conglomerados urbanos.

El explosivo crecimiento de la ciudad de Guayaquil —el más grande

de los dos centros— fue anterior al fenómeno industrial y simultáneo a la crisis de la exportación de banano. Las altas tasas de crecimiento de la población urbana no parecen explicarse por las mismas causas que en los países desarrollados. Actualmente varios conjuntos de ciudades intermedias tienen dinámicas particulares ligadas a fenómenos productivos de sus entornos, a la urbanización de sus economías locales y al hecho de ser la primera etapa de la migración campo-ciudad. Cabe señalar que no se dispone de información específica acerca de los patrones de migración en el conjunto del país, aunque sí se conoce el papel cada vez más importante de la migración temporal, funcionalmente vinculada a cambios en las estrategias campesinas y a la expansión o depresión de la acumulación urbana y agraria.⁴

2. La desestructuración del régimen oligárquico se expresó, por un lado, en la creciente presencia estatal en todos los niveles de la sociedad, y por otro, en el cambio de espectro organizativo y el resquebrajamiento de las bases de la dominación.

El Estado acumuló funciones y tomó iniciativas frente a la sociedad civil, impulsó su tecnificación; captó funciones normativas o indicativas sobre la economía y la política; y generó proyectos para el reconocimiento de los actores dominantes. La industrialización, la reforma agraria, el desarrollo regional enfrentaron su coherencia con las presiones corporativas. En esta relación conflictiva se consolidó un Estado capitalista, cuyos grados de modernidad fueron acelerados por la disponibilidad del excedente petrolero.

La creación de economías externas para el capital y un orden para la acumulación y la provisión de servicios para la reproducción de la fuerza del trabajo son las funciones estatales que aparecieron con claridad y gran regularidad. Las fracciones burguesas llegaron a un acuerdo ante el Estado sobre el monto para transferir y los montos de captación de la renta petrolera, en tanto las clases subalternas se enfrentaron como espacio para la disputa por el excedente para el gasto social.

En la crisis se pueden distinguir tres modos en que el Estado la afrontó a lo largo del tiempo. Uno, de respuesta inorgánica frente a la presión corporativa de dominantes y dominados. Luego, la coherencia y respuesta global representando al capital en general. No obstante, no pudo integrar totalmente las exigencias de un ritmo y una forma de recuperación de sectores empresariales monopólicos que plantean la modificación global del Estado y, particularmente, de la transferencia del excedente. Para ello; en un tercer momento, a través del ejercicio directo del gobierno, se instrumenta una estrategia neoliberal. Los dos últimos momentos fueron salidas a una crisis política que comenzaba a emerger, definida por la ofensiva política de las corporaciones dominantes y la ofensiva social de los subordinados.

La organización de la sociedad civil también registró cambios desde los años '60:

Primero, el resquebrajamiento de las bases de dominación del Estado oligárquico. En la sierra, la ruptura de la autoridad en el modelo hacendatario de funcionamiento social, ruptura que se dio a través de diversas situaciones agrarias y con formas disruptivas de los sectores subalternos locales. Ante la creciente diversificación económica y social, la tierra dejó de significar inmediatamente poder. En la costa, la urbanización acelerada y el debilitamiento de la agroexportación como polo dinámico obligaron a la reconstitución de las formas políticas.

Segundo, la falta de reconocimiento de los sectores dominantes en los proyectos estatales y la ausencia de un proyecto unificador gestado desde la sociedad. En este marco de "crisis de representación", las identidades sociales se produjeron en los gremios, que imprimieron su sello a la política y coparon el aparato estatal. Su contrapartida fue el procesamiento periódico de la crisis en regímenes autoritarios y el movimiento pendular hacia la democracia.

Tercero, la transición hacia un sistema de partidos. Pueden distinguirse cuatro momentos sucesivos de este proceso: a) la reconfiguración de la tendencia conservadora, que asumió la crisis de la formación regional serrana, b) la crisis del liberalismo, que evidenció la necesidad de un cambio de mirada de la política desde los sectores dominantes —y su imposible identificación en un proyecto— hacia las masas, la organización y el Estado; y c) la crisis del llamado "populismo" basado en "desideologización de la política" como estilo de conducción de las masas.

En la actualidad la reconfiguración del sistema de partidos, como nivel en el que se expresa la búsqueda de institucionalidad del Estado y del sistema político, se da a través de un conflicto con los diferentes movimientos sociales. Estos, que atraviesan distintos momentos en relación con su constitución o consolidación, disputan la representatividad de las necesidades e intereses populares en la política.

3. La democracia es uno de los temas que condiciona a los movimientos sociales. La redemocratización fue mediada por un nuevo centro del espectro político. Esta tendencia —cuyos focos de iniciativa fueron la democracia cristiana y la social democracia— debió construir la institucionalidad en la cual actuar. Por un lado, un rediseño estatal que tendía a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la reasignación de funciones del Parlamento. Por otro lado, la conformación de un sistema de partidos políticos que buscara una representación estable.

Se trataba de constituir e institucionalizar una "nueva organicidad". El cambio, la modernización, el desarrollo, la redistribución, la

organización social, la tecnificación del poder trataban de ser —entre otros— los nuevos temas del conflicto político.

El proceso redemocratizador estuvo condicionado por dos factores: por un lado, un tutelaje cercano de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones empresariales que, además de otras demandas, impusieron la ruptura con el movimiento sindical en procesos de consolidación. Por otro lado, la legitimidad de la forma democrática se montó en una convocatoria ciudadana que, a su modo, también enajenó la demanda popular específica. La respuesta popular a la redemocratización fue la masiva adhesión electoral a los partidos de centro que correspondía a las demandas en el período previo. Sin embargo el sistema partidario no penetró en la sociedad civil. Más aun, en su mismo nivel de masa ciudadana, la afiliación a los partidos bordea el 25 % de la población electoral de las ciudades grandes.

El reconocimiento de la conflictividad social alcanza sólo al discurso partidario del centro.⁵ Se reconoce la demanda popular específica, pero se percibe a las organizaciones como "grupos de presión". La economía es entendida como la gran limitación de la política. Las posibilidades de la coyuntura se circunscriben al sostenimiento de los ritmos de la economía y no se recupera la entidad de la política. Así, la crisis fue la limitación central de la redistribución económica y de poder en la democracia.

4. La crisis económica penetró tardíamente en la economía. Si desde 1978 se evidenció una desaceleración, sólo en 1982 en el Estado y en las organizaciones sociales se percibió que el país atravesaba por una situación de crisis. Desde 1976 el Ecuador cabalga sobre una crisis, cada vez más firmemente. Tampoco hubo conciencia de la magnitud y consecuencias del excedente petrolero en los años '70. Entonces, el crecimiento de los precios del petróleo no fue ni podía ser imaginado. La acumulación dependió cada vez más de ese excedente, situación que no fue afectada por su disponibilidad. Cuando escaseó, las demandas del sector privado no cesaron ni se racionalizaron. Se acudió al endeudamiento, inicialmente estatal, capital que permitió sostener la transferencia y el acuerdo interempresarial que lo amparaba.

Durante la década del setenta se consolidó el sector interno de la economía y se reestructuró y diversificó el sector externo, cuya mayor porción es estatal. Ante la demanda creciente de excedente y el estancamiento en los precios y volúmenes de la exportación, el endeudamiento permitió mantener las tasas de ganancia sectoriales y los ritmos de inversión. De modo complementario, pero con creciente importancia, la inducción externa de crédito de corto plazo presionó sobre la capacidad de pago. Concomitantemente, se registró un hipercrecimiento del capital financiero sobre el conjunto de la economía.

Durante 1981 la crisis se presentó desde el sector externo. Decreció la rentabilidad de todos los productos de exportación, sea por los precios o por los volúmenes comercializados. El estancamiento y el descenso posterior del precio del petróleo, luego del alza coyuntural de 1979, debilitó al Estado. La necesidad de restituir el excedente incrementó la demanda por crédito externo y la imposibilidad posterior de pago.

El Estado manejó sus instrumentos económicos en varios ejes. El precio del dólar fue el mecanismo para reconstituir la ganancia del sector externo y dotar de mayores recursos al Estado. Adicionalmente se usaron otras medidas de fomento.

El desmontaje tanto de la política de fijación estatal de precios de la canasta básica como del control de otros productos industriales compensó los nuevos costos y la baja demanda del mercado, al tiempo que incrementó la inflación. La baja de la capacidad adquisitiva real de los salarios no fue compensada por los incrementos nominales. De este modo, se puso en marcha un mecanismo de regulación de la demanda y de restitución de la rentabilidad empresarial. El manejo del gasto público permitió varios niveles de reordenamiento económico: se cambiaron los patrones de inversión y de asignación de recursos disminuyéndose los servicios. Contra estos ejes de la política estatal se montó la reacción de los movimientos sociales.

5. El momento actual se caracteriza por su fluidez y cambio respecto del proceso reseñado. En enero de 1984, cuando la derecha fue derrotada circunstancialmente en las urnas, se produjeron apreciaciones sobre la "maduración" que había alcanzado la sociedad ecuatoriana. Para unos, la democracia y el llamado "cambio" habían anclado positivamente en las masas y, en contrapartida, se habían estabilizado las tendencias de centro-izquierda e izquierda, los que hacia el mediano plazo podrían construir un sistema político participativo en asociación con el movimiento popular. Para otros, el preliminar triunfo sobre la derecha mostraba la derrota de la tendencia fascista del capital y la viabilidad de una administración burguesa "racional" del Estado, lo que clarificaba definitivamente el panorama de contradicciones clasistas del país. En suma, el peligro del autoritarismo legitimado por un proceso electoral y por una organización constitucional se había alejado.

Cuando en mayo la derecha ganó las elecciones con un escaso margen, el desconcierto fue la reacción dominante. Pese a que la mitad de la población había votado en su contra, aún no se reconocían las formas que adoptaría el enfrentamiento. El problema consistía en el diseño de una oposición democrática (dentro de los límites de la institucionalidad e incluso fortaleciéndola) y frontal, cohesionando a las masas en la orilla opuesta al gobierno. En agosto se abrió una coyuntura cuyas formas de lucha pueden verse ahora con claridad.

El sustento en factores reales de poder con que se inició el gobierno fue significativo: la unidad de todos los partidos políticos tradicionales, el soporte en la totalidad de fracciones empresariales empíricamente visibles y una considerable influencia en las masas más atrasadas del electorado. Ahora, la identidad política de la burguesía en el gobierno se depura, aunque sin alternativa de representación en la escena, sino a través de sus corporaciones. Si inicialmente el gobierno respondió a sus intereses globales más coyunturales (la conversión en moneda nacional de la deuda contratada en el exterior y su refinanciación con un interés fijo y plazo largo), el cumplimiento de otras tareas diferencia a las fracciones y evidencia cada vez más la hegemonía del sector financiero, cuya lógica cambia las coordenadas del capital: la concentración y el monopolio se sobrepone al funcionamiento e intereses sectoriales.

Un conflicto con el Parlamento —dominado por la oposición— era funcional a las necesidades de reorganización estatal y de reconstitución política de un gobierno débilmente legitimado en su origen. En el momento actual el Ejecutivo usa la ilegalidad real en el marco de la legalidad formal para condicionar la oposición del conjunto de partidos democráticos que tiene base de funcionamiento en el Parlamento, provocar una respuesta políticamente inadecuada de las masas y desactivar el movimiento popular.

B. Los movimientos sindical, barrial, femenino, regional, campesino e indígena.

En la actualidad los ejes en torno de los cuales se estructuran los movimientos sociales condicionados por la democratización y la crisis son, por un lado, el mercado laboral urbano desde el cual se perciben continuos desplazamientos y fronteras grises hacia la esfera de la reproducción. En este plano se articulan lo sindical, lo vecinal y lo femenino. Por otro lado, los agrupamientos y conflictividades sociales alrededor de las distintas situaciones de desarrollo capitalista: redes de ciudades y sus entornos agrarios que constituyen sociedades civiles locales y regionales de contornos definidos y situaciones campesinas étnico-culturales homogéneas que entablan relaciones distinguibles con la sociedad nacional y sus organizaciones. En este segundo nivel se articulan demandas pluriclasistas regionales, campesinas y étnicas.

1. Los trabajadores en las crisis

Se ha intentado reconstruir la historia de la clase obrera registrando los conflictos surgidos en las primeras fábricas y la participación en "fechas clásicas" como el 1º de Mayo. Otra entrada ha sido la búsqueda

de las ideas socialistas, anarquistas y comunistas asociadas con los orígenes de la clase obrera. Muchos de estos intentos adolecen de premura académica y política. Tratan de encontrar clases que en la realidad no se habían constituido, como la burguesía industrial, o el proletariado, se les asigna roles sociales que bordean lo imaginario y se proyecta una sociedad esquemática, en la que habían cumplido tareas que ocurrieron sólo en la mente de intelectuales que pretendían una "organicidad impositiva".

El proceso de industrialización (enfatisando el carácter de proceso, es decir, la ocupación de un lugar en la acumulación por una fracción de capital que subsume realmente al trabajo, genera mercancías para el mercado y se apropia de un plusvalor para lo cual establece relaciones con otras fracciones de capital y generaliza la constitución de la tasa de ganancia como forma específica) no fue fruto de la crisis de los años '30. No obstante, los núcleos obreros tuvieron una participación importante en las principales movilizaciones populares de los primeros sesenta años del siglo: las del 15 de noviembre de 1922 y el 28 de mayo de 1944. Desde esta última la derrota de la posición progresista presiona fuertemente sobre la imagen de socialismo y de institucionalidad política que se disputa en la sociedad ecuatoriana.

Sólo a partir de los años '60 se presenta un fenómeno industrial de significación nacional con sus actores fundamentales y a mediados de la década siguiente se forma el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con las tres principales centrales sindicales: Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC). Las primeras acciones conjuntas arrancaron en 1971 con una fracasada huelga de alcance parcial. Entre 1975 —año en que las Centrales Sindicales ubican el inicio del proceso unitario— y 1985 se han realizado diez huelgas nacionales de trabajadores. Pese a la evidencia de una movilización de creciente importancia y de plataformas que pueden ser calificadas de "obreristas", se subraya la dominación del movimiento como sindical y no como obrero, argumentando la falta de generalización de la relación capital en la sociedad.⁶ La clase obrera es la vértebra social de la organización de las centrales, pero la práctica de la movilización implica a muchos otros actores y problemáticas. Más aun, pone de manifiesto los diversos espacios de constitución de la identidad de los obreros y su desplazamiento.

En el ensayo de Jorge León y Juan Pablo Pérez, *Crisis y movimiento sindical en Ecuador: las huelgas nacionales del FUT (1981-1983)*, se reconstruyen cinco movilizaciones de trabajadores desde cuatro preguntas: las modalidades de respuesta del movimiento sindical frente a las medidas estatales, la actitud de los aparatos Legislativo y Ejecutivo frente al sindicalismo y su movilización; las alianzas con otros actores sociales; y

la dinámica de la movilización. Finalmente plantean varias características del sindicalismo como un movimiento social.

Durante el período estudiado, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) alcanzó un protagonismo en la escena política y con respecto a las necesidades populares. No obstante, su constitución como actor social no es homogénea, ni su conformación como movimiento, lineal. El FUT encara una serie de tareas de construcción de su representatividad de las clases subalternas, varias de las cuales merecen un tratamiento crítico.

La crisis presentó sus primeros signos en 1981. Para entonces, el movimiento sindical se encontraba condicionado por dos factores. Por un lado, la redemocratización había generado en la base popular expectativas sobre la solución de sus demandas, y en la dirigencia se había producido un resquebrajamiento por la actitud que debía adoptarse en la coyuntura. De otro lado, el FUT había logrado una relación directa con los trabajadores, en el marco del régimen autoritario 1973-79. El período en análisis empieza con un desplazamiento de la actitud del FUT respecto de la política. Si el acento inicial de sus preocupaciones fue la distribución del excedente estatal, cambia luego hacia los efectos más inmediatos de la crisis sobre los trabajadores. Sólo en el año siguiente logra una conciencia mayor sobre la dimensión de la crisis, aunque no se puede afirmar que posteriormente haya planteado cómo afrontarla. Más bien, junto al inmediatez y corporativismo con que se representó la demanda, las reivindicaciones estratégicas adquirieron carácter complementario. Las plataformas sindicales para las huelgas lo tradujeron bajo la forma de dualismo.

Las movilizaciones de 1981 dejaron un resultado en la organización: la reconstitución del tema de la unidad sindical. Pero también la impresión de que el FUT fue arrastrado por la protesta popular.

El año 1982 fue el más importante para el crecimiento del movimiento sindical en todos los órdenes. Levantó la contradicción clasista fundamental de la sociedad y la articulación más amplia de espacios y actores en respuesta al Estado y al capital. La dinámica de los acontecimientos mostró potencialidades y limitaciones. Por un lado, la posibilidad de enfrentar al sistema político. Por otro lado, el límite que impuso el sostenimiento de la democracia, que entrampó a las salidas, una vez que "la lucha popular desbordó el marco impuesto por el régimen democrático al conflicto social, erosionándose así la legitimidad del régimen representativo".⁷ El balance final fue una acumulación de experiencias en el FUT: tomó conciencia de su capacidad para ser el "portavoz del descontento" y de su debilidad hegemónica.

En 1983 el FUT definió un discurso más inclusivo. Además de lo popular tematizó la democrático y lo nacional. Involucró al mayor número de actores sociales e instituciones. Puede criticarse el carácter de la interpelación, pero creó las bases de ampliación de su espacio.

Si en el discurso se avanzó, la capacidad de convocatoria y movilización que se había desplegado en el mediano plazo se encontraba agotada. La debilidad para la expresión colectiva daba lugar a respuestas individuales y familiares. En el contexto aparecieron las elecciones como un factor condicionante; o sea, la "reconstrucción de la forma ciudadano (a) cerrando la brecha de la legitimidad del sistema representativo que ocasionaron las luchas de octubre de 1982."⁸

El Estado fue el opositor fundamental del movimiento sindical en toda la coyuntura, ya que fue la instancia más importante de la reestructuración social y económica obligada por la crisis. Se definió por dos momentos. En 1981 no se planteó una estrategia estatal global para encarar la crisis, sino que más bien las diferentes políticas fueron producto de presiones corporativas de distintas fracciones burguesas. Hacia adelante, la redefinición del patrón de desarrollo orientándole hacia contenidos neoliberales le permitió asumir al Estado el papel de capital colectivo y responder a sus intereses globales.

La actitud del movimiento social frente al Estado estuvo fuertemente teñida de "instrumentalidad". Se lo concibió redistributivista, es decir, con el papel de repartir el excedente social.

Frente al sistema representativo, las movilizaciones del FUT tuvieron diversas posiciones. Inicialmente prescindieron de la Cámara Nacional de Representantes, para posteriormente acudir a ella, involucrándola en su acción. Se destacó la debilidad de la mediación parlamentaria, mostrándose incapaz de procesar la conflictividad social. Los partidos que no habían penetrado en las organizaciones del FUT actuaron desde la Cámara. Las formaciones políticas involucradas en la organización sindical reprodujeron las rupturas entre lo sindical y lo político, a través del esquema de la "correa de transmisión".

Las alianzas que montó el movimiento sindical se manifestaron débiles, sea por la situación estructural de los campesinos frente a la crisis, sea por la superposición de los antagonismos étnicos a los de clase. Se plantea como hipótesis que "el principal referente del comportamiento para los sectores populares urbanos (incluidos los mismos obreros industriales) es la ciudad y no la fábrica (y por extensión el mismo mercado laboral)".⁹

Con respecto a la política, la principal conclusión de la investigación es la necesidad de un proyecto político del FUT, lo que le permitió avances cualitativos.

2. Los barrios se organizan

No existe investigación acumulada acerca de los movimientos urbanos. Es preciso rastrear sus orígenes en las movilizaciones promovidas por Concentración de Fuerzas Populares (CFP), partido político de

asiento regional que inicialmente basó su organización en los barrios de Guayaquil, para luego expandirse hacia varias ciudades intermedias de la costa. La CFP interpeló a la política municipal —en torno de la cual se define— desde posiciones antioligárquicas y anticomunistas. El lenguaje de respuesta a la necesidad inmediata configuró un liderazgo "populista" y cooptó la organización barrial y las cooperativas de vivienda formando redes políticas clientelares y despóticas.

Más recientemente, a mediados de los años '70, se multiplicaron las organizaciones de pobladores y de demandantes de tierra en la ciudad de Quito. Inicialmente fueron bases de apoyo de partidos tradicionales —salvo contadas excepciones— y en la actualidad son una arena de disputa con los partidos de izquierda.

La redemocratización permitió el nacimiento de nuevas organizaciones en todo el país, en concordancia con las tendencias de la urbanización; la competencia entre las formas organizativas; y la integración de sus reivindicaciones en contextos más generales de movilización de clases subalternas. También implicó la politización de varias organizaciones barriales.

"La organización barrial entre la democracia y la crisis" es el título del ensayo de Mario Unda. Pretende responder a dos preguntas: el carácter de las tendencias renovadoras en el interior de las organizaciones populares, que si bien no son las únicas ni mayoritarias en todos los casos podrían ser síntomas de la constitución de un "movimiento vecinal"; y la vinculación entre éstas y el movimiento popular. Para ello reconstruye empíricamente los cambios del espectro organizativo, el redimensionamiento de las necesidades populares en medio de la crisis, y, finalmente, examina los vínculos entre demandas, movilizaciones y organizaciones urbanas con las de otros sectores subalternos.

En varios períodos se ha incrementado y diversificado la organización de los "vecinos". Estas asociaciones cubren temas tradicionales como las "cooperativas provivienda" y "comités barriales", y otros nuevos, como Asociaciones "juveniles", "femeninas" y de "cristianos de base". En la actualidad en su interior se incuban tendencias innovadoras que se definen por la mayor organicidad contra la dispersión y el individualismo; cuestionan la organización "cacical" a través del desarrollo de la participación interna; responden al paternalismo estatal a través de la movilización y de la ampliación y diversificación de sus demandas; evitan la cooptación estatal y partidaria y el aislamiento creando organizaciones abarcativas independientes.

La vida regular y el ensanchamiento de los objetivos de las nuevas organizaciones son sus aspectos centrales. En la forma tradicional de las organizaciones pro vivienda, éstas morían cuando "el objetivo de los asociados (la tierra) y el de la empresa (el lucro) se habían conseguido [...] para ambos".¹⁰ Por el contrario, en las formas innovadoras se percibe

un alto nivel de convocatoria, consenso y participación en la lucha por la tierra; la constitución de conciencia política y de la necesidad de una continuidad organizativa en la consolidación del barrio; y la legitimación de la organización, transformada de hecho en Comité barrial aunque su formalidad pueda ser otra. En las organizaciones femeninas y juveniles lo más llamativo es la apropiación progresiva de temas y acciones de la vida barrial y de sus actores sociales y conflictividades.

Dos vías de cambio se observan en los Comités barriales. Por un lado, frente a la relación clientelar vecino-Estado y al carácter de "organizaciones de los propietarios de lotes y viviendas y no del conjunto de moradores" comienzan a tomar a su cargo la gestión de la vida barrial, entendiéndola también como aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo y su inserción laboral. Por otro lado, la formación de organizaciones inclusivas a otro nivel es calificada como "la *irrupción* de los moradores en la vida urbana [que] encuentra posibilidades de tornarse en una *apropiación* de la ciudad por parte de los sectores populares".¹¹ Las Federaciones, al unificar las organizaciones de distintos barrios —preferentemente de una zona determinada—, son la expresión más alta de las tendencias innovadoras.

La crisis y la democracia son condicionantes de la nueva situación de las organizaciones vecinales y del germen de un movimiento social. La crisis creó nuevas demandas, mecanismos organizativos y formas de lucha, ya que reordenó la distribución espacial en la ciudad de los diferentes sujetos sociales, profundizó la desigual distribución del equipamiento colectivo e hizo surgir nuevas reivindicaciones más globales y cotidianas, relativas al consumo individual. El momento actual se define por el "papel que está jugando la crisis en la aparición del movimiento social".

La democracia, "entendida como posibilidad organizativa", amparó el crecimiento cuantitativo de las organizaciones y redefinió la tradicional cooptación de las organizaciones barriales por el Estado o el sistema partidario. Lo más llamativo es que la legitimación de la reivindicación barrial se produce a través de organizaciones centralizadas. Sin embargo, "la organización popular no se ha desarrollado lo suficiente como para volverse un impulso motor de coyunturas democráticas que faciliten su propio desenvolvimiento".¹² Antes bien, el autoritarismo gubernamental actual se muestra en que han sido menos afectadas las organizaciones transitorias y más las organizaciones reivindicativas.

Las dos contradicciones que estructuran el momento actual son, por un lado, el conflicto entre la existencia pasiva de las organizaciones y la defensa del espacio que han conquistado, constituyéndose las organizaciones en "actores de los derechos democráticos de la nación". Por otro lado, la relación de fuerzas entre tendencias innovadoras y tradicionales en el interior de las organizaciones y entre ellas influye en la con-

formación del movimiento popular. Se expresa en la participación que no es espontaneidad pura, sino que se encuentra amparada por la organización.

En suma, el barrio y sus organizaciones son un "punto de encuentro de una serie de preocupaciones populares más o menos organizadas", pese a la evidente heterogeneidad en su composición social.

3. *Nace un movimiento feminista* ✓

Con un grado todavía débil de tematización social y marcada por el carácter de "no visibilidad" de su actor, emergió una demanda femenina también asociada con la redemocratización. Sus antecedentes no fueron necesariamente los movimientos sufragistas. El Estado ecuatoriano se ha destacado por el reconocimiento temprano de estos aspectos formales de los derechos políticos de la mujer. Sin embargo, desde los años '60, aparecieron en la escena varias formas de reivindicación de lo femenino vinculadas con el movimiento popular y con la derecha. En el primer caso, reivindicando la presencia femenina en la historia y como parte de la clase obrera. En el otro, planteando su incorporación al desarrollo. También factores internacionales indujeron la temática. Lo más importante fue la adopción de la cuestión femenina en las políticas estatales vinculadas con la democracia.

Las diversas posiciones permiten pensar en una disputa futura a múltiples niveles. Por un lado, la institucionalidad política formaliza y encierra en sus límites a la reivindicación. Por otro lado, las formas que se instrumentan desde la sociedad: resistencia (doméstica y barrial); de interpelación (lenguaje diferenciado masculino/femenino); y de ofensiva (demandas que persiguen constituirse en ideologías de organización social).

La representación política de una entidad femenina no emerge; se encuentra en suspenso. Los partidos políticos en sus planteamientos instrumentalizan o bien omiten un tratamiento específico. La derecha plantea un tratamiento de los problemas más superficiales de la mujer levantando formas conservadoras de su inserción familiar y formas liberales de su incorporación al mercado de trabajo. La centroizquierda no trata el problema, que a su modo es una forma de afrontarlo. La izquierda lo asume de modo subordinado, sin autonomía y reduccionista respecto de las problemáticas de clase.

El momento actual se define más bien por la multiplicación y el crecimiento de organizaciones femeninas, antes que por su centralización. Más aun, se producen planteamientos acerca de la no vigencia de la centralidad como forma. La constitución de la identidad —de modo pluralista— es la etapa actual, antes que el acceso a la institucionalidad.

En el artículo *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecu-*

dor, de Mercedes Prieto se plantean dos entradas para estudiar la formación actual de un movimiento femenino: se indagan los factores globales y contextuales y se examinan dos experiencias de formación de organizaciones femeninas. Concluye diagramando la existencia latente de un movimiento femenino.

Se explicitan varias premisas teóricas. A saber, evitar el reduccionismo de lo femenino a las clases y plantear su articulación a través de las relaciones de poder, subordinación y dominación. Se realiza un balance de las proposiciones sobre la imposibilidad o viabilidad de la formación de un movimiento de mujeres en América Latina. Para el caso ecuatoriano, no existiría un examen de los conflictos de la mujer desde las esferas institucionalizadas. Sin embargo, actualmente, las reivindicaciones y estilos más innovadores operan a nivel del poder social, pese a su constitución histórica "bajo los parámetros de la ideología liberal y que en su versión más moderna tiene además otros referentes en el Estado".¹³

En los años '60 se operaban cambios en la familia que permitieron la individualización de la mujer, quien "deja de ser un signo de intercambio en las relaciones sociales y se convierte en sujeto de deberes y derechos, lo que le permite encontrar su identidad como ser diferenciado respecto del núcleo familiar".¹⁴ También se incorpora crecientemente al mercado laboral. El reconocimiento estatal de la igualdad creó una dicotomía con la cotidianeidad, en la que se reprodujeron estereotipos e ideologías que actualmente son cuestionadas. La participación tradicional femenina en la política fue la lucha por reformas legales y junto a las demandas de los movimientos obrero y campesino, cuyas centrales y federaciones crearon organizaciones de mujeres en la década siguiente. En estos años también apareció un "voluntariado" que, vinculado a conservadores y liberales, planteó la promoción de la mujer pobre. Sin embargo, más allá de las tendencias políticas, diversos sectores se juntaron para la celebración de eventos específicos.

La redemocratización desbloqueó la temática femenina y produjo dos efectos. Por un lado, "encapsuló el proceso vivido por las organizaciones femeninas que nacieron fuera de la iniciativa estatal"; y, por otro, "permea hacia abajo una ideología acerca de la mujer facilitando la problematización social de la temática".¹⁵ En los años '80 aparecen como decisivos los factores externos y la creación de un aparato estatal especializado que interpela a la mujer como sujeto social específico.

Prieto plantea que en la actualidad se perfilan tres concepciones acerca de la mujer: a) "La problemática femenina es una derivación de las estructuras capitalistas y de explotación", en las que una mayor incorporación productiva permitirá a las mujeres elevar su independencia y disminuir la exclusión en otras esferas de la sociedad. Se critica la afirmación, ya que al privilegiar la adscripción a las clases subordinadas se debilita la búsqueda de identidad femenina. El planteamiento está vinculado

a organizaciones populares y de clases medias radicalizadas; b) "El problema femenino como resultado de la exclusión de la mujer del desarrollo." Este es un tema de la derecha —aunque no exclusivamente—, que pretende, a partir de un reconocimiento de la exclusión, obviar el examen de las causas de la asignación social de roles y "una compleja dinámica de inclusión— exclusión... [la mujer] tiene una incorporación concreta a la dinámica social... [y] [...] [el planteo] pierde de perspectiva el carácter disruptivo que tiene el movimiento de mujeres. Se intentaría una integración de la mujer comparativamente semejante a la masculina y, también, una adaptación casi sin contradicciones al sistema vigente"; y c) "Lo femenino como espacio de dominación particular que atraviesa al conjunto de las clases y otras formas de identidad social." La "invisibilidad" a que está sujeta la mujer debe ser tratada desde la lucha contra la dominación capitalista y la dominación patriarcal a la que está adscrita.

Varios datos muestran, por un lado, una ideología dominante de lo femenino en los marcos de la igualdad, crítica de la depresión del consumo y de la exclusión. Secundariamente se alude a situaciones de subordinación de género. Estas concepciones no tienen continuidad clara con las demandas, en las que se privilegian aspectos de la esfera pública, como protección y servicios estatales. Las plataformas de las organizaciones femeninas, en unos casos, evidencian la reducción de la política a la institucionalidad y, en otros, nuevos elementos que no han sido rescatados.

El tema de la crisis atraviesa a las organizaciones femeninas: presión por la inserción en el mercado laboral y la sofisticación de las estrategias de supervivencia. Los casos corresponden a un barrio periférico reciente y a uno consolidado. La mujer aparece como el sujeto que constituye cotidianamente al barrio desde su ámbito familiar y en las relaciones externas.

Entre las formas opresivas fundamentales se destacan el matrimonio o los hijos, ya que significan una ruptura con el ámbito público, que se ve reducido al barrio. Empieza entonces una serie de estrategias para conseguir ingresos complementarios —ahora notablemente urgidos dada la crisis— situación que se enfrenta con una estructura ideológica rígida, una "moralidad" que la mujer no puede transgredir. Por un lado, la actividad femenina está sujeta al tipo de ocupación de los hombres, a su entrega de trabajo a la unidad doméstica y a su rango de ingreso. Por otro lado, la exposición de la mujer al espacio público está mediada y controlada por los hombres. La esfera pública es un espacio de incertidumbre para la mujer y fuente de conflicto con los hombres.

La valoración del trabajo doméstico entre las mujeres, los hombres y la comunidad barrial forma parte básica de las alienaciones a que se encuentra sujeta. También la dependencia que se reedita a nivel de la or-

ganización. La reproducción opera a través de redes de vecindad o familiar. En los dos niveles, como en las organizaciones barriales, operan formas clientelares y autoritarias.

Luego de examinar las contradicciones básicas de la vida barrial desde la perspectiva de las mujeres, se plantean los aspectos que actúan como obstáculos y potenciadores de la movilización femenina: a) la organización femenina como mediación entre lo público y lo privado, que permite el acercamiento de los niveles y la tematización de lo privado incorporado a la política; b) el reconocimiento del trabajo doméstico y negación del alejamiento de los mecanismos de socialización del ámbito público; y c) el reconocimiento de una identidad, del "nosotras", rompe la dependencia y el aislamiento.

4. Las regiones capitalistas

Los movimientos regionales y locales han tenido fuerza a lo largo de la historia ecuatoriana. El tema de la constitución de "sociedades regionales" empieza a ser reestudiado y redimensionado, una vez que existe perspectiva histórica. La crisis de representatividad de los años '60 evidenció la falta de un proyecto nacional para el conjunto social. Su revés temático, la cuestión regional, adquiere su real dimensión no sólo de ideología sino de práctica constitutiva del Estado y de "anclaje" de la formación de las clases y agrupamientos sociales. Así las movilizaciones de contornos regionales y locales dejan de ser únicamente la expresión de ideologías arcaicas y son repensadas como formas de constitución de la sociedad civil y de existencia del Estado. En las dos últimas décadas la aceleración de la acumulación capitalista y los proyectos estatales de reformulación del espacio se superpusieron a las formas históricas constituidas de las regiones y a sus demandas.

Se ha clasificado a las movilizaciones entre las que corresponden a regiones estructuradas, las que corresponden a regiones que aún no se han constituido o que están en proceso de hacerlo.¹⁶ En todo caso, siendo la forma más antigua de movilización, es también una modalidad nueva de responder a la penetración desigual del Estado en la sociedad.

En lo que va del siglo, no existe territorio del Ecuador en el que no se hayan presentado reivindicaciones ligadas a las condiciones de producción y reproducción de ese espacio y de sus relaciones sociales. En general, implican a los partidos actuantes en la escena local, los que diluyen su perspectiva más global como efecto de la movilización. Los movimientos regionales generalmente no se expanden a territorios vecinos, sino que a su aparición simultánea en sitios distantes geográficamente, corresponden iguales problemáticas económicas y sociales.

Simón Pachano articula su trabajo *Movimientos sociales regionales*

en el Ecuador alrededor de tres temas: la definición y constitución de regiones; las características de los movimientos sociales regionales y el examen de un caso sobre los cambios cualitativos en los movimientos regionales de los últimos años, enmarcado por la coyuntura de crisis.

La categoría que define a una región es su "dinámica interna", la constitución en su interior de grupos de poder que enfrentan al Estado central y/o a otras regiones y que luchan por la hegemonía estatal. Aquellos espacios que no tienen estos atributos son objetos de disputa desde el ámbito estatal. Basado en esto Pachano divide al Ecuador en tres regiones: Guayas, Cuenca-Sierra Sur y Quito-Sierra Norte. Una región en vías de consolidación por la presencia del movimiento étnico sería la Amazonía, quedando los restantes espacios como formas no estructuradas y con diversos grados de dependencia.

Los movimientos sociales regionales implican la "movilización de la región como un todo, con una presencia sostenida [...] una determinación de metas comunes para el conjunto de sectores internos y la identificación de un adversario".¹⁷ Debe existir un sector dominante capaz de expresar la voluntad general que puede tener múltiples formas de presentación: copamiento del aparato del Estado, movilización y desarrollo ideológico enraizado en la población.

Cabe diferenciar los movimientos sociales regionales de los movimientos en la región. Estos se definen por la falta de continuidad, "pueden tener un carácter de clase o inclusive pluriclasista, pero que tienden siempre a alterar la situación interna conformada históricamente de la región".¹⁸ La hegemonía no es una condición para su surgimiento, pero sí lo es el grado de antagonismo que cuestiona la estructura de poder regional.

La cuestión regional y sus movimientos sociales atraviesan una situación de transición marcada por la "conformación o fortalecimiento de clases nacionales, la ampliación y relativa descentralización del aparato estatal, la mayor presencia del Estado a nivel de la sociedad civil, el reordenamiento del juego político."¹⁹

Las autoridades seccionales de la ciudad de Guayaquil convocaron a un paro general que se llevó a cabo en dos momentos entre mayo y junio de 1984. El primero "constituyó un revés para los impulsores del evento: división, ausencia de metas claras, imposibilidad de lograr consenso"; en tanto el segundo, mostró "cohesión de diversos sectores, metas explícitas y posibles enfrentamientos con el poder central".²⁰ La reconstrucción de los acontecimientos muestra la constitución y capacidad de convocatoria de los líderes —como el alcalde—, la forma de los opositores y el reordenamiento de las fuerzas en la ciudad.

Pachano llega a la conclusión de que se trató de "un nuevo tipo de movimiento en la región y que no llegó a ser —ni se lo planteó jamás— un movimiento de la región".²⁰ La movilización, pese a que tuvo como

referente al Estado, no implicó el conjunto de actores de la región, sino a una ciudad dentro de ella. La coyuntura política nacional de transición gubernamental sobredeterminó la movilización.

5. Servicios y tierra, campesinos e indígenas

Los orígenes del movimiento campesino estuvieron asociados, desde 1926, con el Partido Socialista —que presentó un ideario más bien industrialista— y, desde 1931, con el Partido Comunista, de ideología marcadamente obrera. Particularmente este último impulsó la sindicalización de "huasipungueros" en haciendas en las que se había fracturado la presencia terrateniente. El Estado como sustituto no logró reconstituir las bases de la dominación frente al asedio de los campesinos.²¹

Sobredeterminado por las coyunturas nacional e internacional reaparece el movimiento campesino en la década del sesenta. Se produjeron diversas situaciones de transición en las que se disolvieron, conservaron o transformaron las relaciones de huasipungo, bajo diversas formas de los antagonistas —inserción de los terratenientes en los cambios nacionales y modalidades para afrontar la presión campesina en sus unidades de producción (liquidación de huasipungos, redistribución de la tierra y cambios tecnológicos).

La hipótesis general más relevante sobre el período es que la supeditación formal del proceso de producción inmediato al capital permitía la sobreexplotación de grupo doméstico —combinaba renta en trabajo y plusvalía—, y afincaba a la estructura familiar en la hacienda, situación que no choca con la modernización y el incremento de la productividad. Varias tácticas fueron utilizadas por los terratenientes, de las cuales no puede deducirse la existencia de un proyecto político que les permitiera salir de su debilitamiento a nivel nacional y local. El movimiento campesino enfrenta al patrón a través de acciones abiertas y a través de presiones económicas encubiertas para conseguir la reapropiación de la tierra y del producto. En definitiva, la presión dependía del lugar que ocupaba en la correlación de fuerzas en el momento.²²

La pluralidad de vías de penetración de capital en el campo, de respuestas de los diversos actores campesinos, de espacios y de formas reivindicativas, plantea la necesidad de analizar si se trató de un movimiento o de una movilización. En el segundo caso habría en ella una posición crítica con respecto a la dirección política de los campesinos, posición que profundizó sus características estructurales antes que conferirles unidad.²³ Estos fueron los condicionantes de la primera fase de la reforma agraria.

Para la segunda fase (1970-1975) el panorama agrario se había reordenado y el proceso de diferenciación se había profundizado. Las debilidades fueron superadas por la presencia de la conducción centralizada de

Federaciones Campesinas, que sin embargo dependía de las iniciativas de la política estatal y estaba imposibilitada de producir acontecimientos a nivel nacional. No obstante, en determinadas zonas se impulsaron importantes acciones redistributivas.

Dos factores pesan sobre el actual repliegue del movimiento campesino. Por un lado, la priorización de las políticas de fomento agropecuario, que constituyeron a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria en interlocutores de sus servicios y de las nuevas políticas de precios. Por otro lado, la gestión de las unidades productivas o de las formas asociativas, que diferencia a los campesinos y debilita la presión de los sin tierra. Sin embargo, la crisis impulsa a la recampesinización de la fuerza de trabajo expulsada del mercado urbano, que inicialmente se tradujo en presión sobre la tierra disponible en sus propias unidades y luego podría levantar nuevas demandas por la tierra.

Las modalidades de evolución del movimiento campesino e indígena permiten entender su inserción en la crisis, plantea Manuel Chiriboga en su trabajo *Crisis económica y movimiento campesino e indígena*. Las características del desarrollo capitalista en el agro, el proceso de diferenciación social, los modos de articulación de los campesinos del mercado, el papel del Estado, el resurgimiento de planteamientos étnicos, las políticas estatales indigenistas, han presionado no sólo en favor de la heterogenización del campesino, sino de la constitución de organizaciones regionales de segundo grado más homogéneas, que llevan adelante luchas en consonancia con las características de los sujetos involucrados y que mantienen cierta autonomía con respecto a las Federaciones Campesinas Nacionales. Chiriboga califica esta relación entre organizaciones regionales y Federaciones Nacionales como una centralización flexible o descentralizada.

Se analizan cuatro casos de organización campesina regional y una lucha local y se pregunta a cada caso sobre su origen, la orientación, la gestión y la reivindicación, la vinculación con el Estado, los efectos de la crisis y la participación política y sindical. También se analiza el papel de una de las Federaciones Campesinas Nacionales en torno de reivindicaciones globales, su relación con el movimiento obrero y su vinculación con las organizaciones campesinas de segundo grado.

El contexto de la situación actual del movimiento campesino e indígena es el cambio de la política agraria. Desde los años '60 hasta mediados de la década del setenta el tema estatal dominante fue la redistribución de la tierra, lo que condujo a una respuesta nacional de los campesinos. De allí a la actualidad, cambió hacia el aumento de la productividad en todas las unidades, lo que incrementó el proceso de heterogeneización campesina. Desde la base se ha generado una demanda por autonomía organizativa y su "constitución como sujetos políticos abierta por la democracia".²⁴

Las organizaciones depositarias de la tendencia a la autonomización son Uniones Campesinas de segundo grado. La expresión reivindicativa de la heterogeneidad campesina es por políticas estatales diferenciadas y dirigidas hacia cada sujeto campesino. Superpuesta a esta tendencia existe una memoria de lucha por la tierra que los relaciona con las organizaciones sindicales y federaciones campesinas. No obstante, en la toma de decisiones, prima su vinculación con la coyuntura local, para posteriormente plantearse el sentido de las directivas de los centros urbanos.

Acerca del nacimiento de las organizaciones investigadas en la costa, un caso tiene origen en el período de "agrarismo reformista radical" de su filial, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), definido por la lucha por la reforma agraria, nuevos sistemas de comercialización y democratización del acceso a los recursos estatales. El otro caso se vincula a la FENOC luego de un proceso de disputa por la tierra con un "enclave bananero" —de los pocos que existieron en el país— y en el momento en que declina la reforma agraria.

Las líneas de trabajo actual de las organizaciones luego de conseguida la tierra, son programas de apoyo a los miembros basados en recursos estatales o de entidades de desarrollo privadas. Las demandas comunes son crédito, comercialización y servicios. El objetivo de estos campesinos que producen mayoritariamente para el mercado es el mejoramiento del nivel de vida y algún nivel de capitalización. Las organizaciones también se plantean cómo limitar los procesos de diferenciación.

Entre 1982 y 1983 el invierno destruyó significativos volúmenes de cultivos e infraestructura. Entonces se reforzó la demanda de recursos del exterior por parte de las organizaciones, y se probó su capacidad de gestión. Esto les planteó la poca capacidad de autosubsistencia en estas situaciones. A su vez, la crisis actúa doblemente sobre ellas: incrementando los precios de los productos que ofertan al mercado y bajando su capacidad de consumo de bienes no producidos.

Las organizaciones de la sierra presentan dos vertientes de constitución. En un caso, una organización campesino-indígena que se plantea cómo enfrentar la opresión que sufren en tanto indígenas, basados en la reducidísima disponibilidad de tierra y en condiciones de semiproletarización. La consecución de la tierra implica la reivindicación étnica, en el sentido de que la pobreza conduce al "amestizamiento". También se vincularon a la FENOC.

El otro caso es una comuna que lucha por la tierra con el apoyo de una organización nacional sindical y no una campesina. Chiriboga ejemplifica una situación en la que "Las Federaciones Nacionales parecen no poder expandirse más allá de las zonas donde tienen una influencia lograda en el período de auge de la lucha por la tierra: 1970-1975",²⁵ Estos campesinos recibieron la tierra sin romper los lazos con la hacienda.

Con el tiempo la presión demográfica aumentó, y con las restricciones del mercado urbano y agrícola producto de la crisis se tomaron la hacienda.

La reivindicación por un Estado pluriétnico y multicultural se examina en una organización de la Amazonía que fue originalmente impulsada por una comunidad religiosa, pero que al fortalecerse determinó por sí misma su estrategia frente a la sociedad nacional: reafirmación de la etnicidad y autosuficiencia económica a través de la modernización. Frente al Estado, adoptan dos posiciones: enfrentar a las Fuerzas Armadas y a la colonización y colaboración en proyectos, cuya programación y ejecución controlan. Lo más significativo fue obtener la entrega de títulos colectivos de tierras creando una frontera a la colonización: "[...] constituyeron paulatinamente una territorialidad reconocida por el Estado e infranqueable a través del mercado".²⁶ La crisis los afectó por la apertura de nuevos proyectos agroindustriales. En respuesta se han acercado al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sobre el cual tenían reservas.

La FENOC es analizada en su carácter de organización campesina más grande del país. En su origen estuvieron presentes militantes urbanos vinculados a dirigentes campesinos. Transitaron desde una posición cristiana radical hacia una socialista. En 1973 la FENOC promovió importantes movilizaciones por la reforma agraria, en contrapartida al anuncio de una nueva legislación. Ahora su base social son antiguos beneficiarios de la redistribución de tierras, en torno de los cuales se crearon las organizaciones regionales que reivindican la especificidad antes que la globalidad. Por ello, la FENOC levanta temas de alcance nacional: tierra, crédito, legalidad. En la práctica esta dualidad se traduce en el reconocimiento de un discurso y, simultáneamente, en la inserción en el Estado. Si esto puede generar una ruptura, el ejercicio político en torno del poder local tiende a soldarla.

Los campesinos beneficiarios de la reforma agraria tienen un aspecto en común: la clase terrateniente parece haberse diluido como el enemigo claro; "el enemigo parece estar centrado en la pequeña burguesía comercial pueblerina y, en general, los intermediarios, usureros, etc."²⁷ El Estado aparece dual: una asociación positiva con el proveedor de servicios y una asociación negativa con el responsable de políticas que afectan a los campesinos.

6. Los sectores medios también protestan

En el marco de las anteriores movilizaciones se produjeron otras ligadas a los sectores medios. Choferes, maestros, profesionales y estudiantes ocuparon circunstancialmente y sin continuidad la escena ya que

dependen de estímulos externos puntuales y circunscritos al actor. Cada una tiene especificidades que reseñaremos ligeramente.

Las huelgas de choferes paralizaron ciudades o regiones e impusieron condiciones económicas a los gobiernos contra los que estaban dirigidas. Sus reivindicaciones se articulaban con los conflictos coyunturales, con la modalidad de una masa de maniobra que obtenía réditos, siempre de una de las partes: de sus antagonistas o de sus aliados objetivos y circunstanciales en la oposición. Si inicialmente las organizaciones de choferes formaron parte de la Central de Trabajadores Ecuatorianos, al consolidarse una actividad terciaria empresarial del sector interno adquirieron personalidad e intereses independientes y, en general, contrapuestos a los populares como en el caso del transporte de pasajeros. En los últimos años, las relaciones con el Frente Unitario de Trabajadores son las de una mutua utilización cuando existe convergencia (que desde 1981 no se ha producido). Contrariamente, el FUT empuja por la sindicalización de los asalariados contra sus patrones que forman cooperativas con lógica económica enteramente capitalista.

Las movilizaciones de profesionales generalmente presionaron por condiciones salariales y de trabajo para funcionarios estatales. Obtuvieron solidaridad de sus colegios profesionales o de facultades universitarias. Su relevancia fue inflada por los medios de comunicación, que encuentran desproporcionado que estos sectores sociales acudan a la movilización para el logro de sus reivindicaciones. La mayor parte responde a la depresión del consumo vinculada con la congelación de sus salarios. Corresponden a capas empobrecidas de los sectores medios, que se constituyeron o expandieron con el petróleo y a los que la depresión económica y la baja del gasto estatal aproximan a los ingresos familiares obreros de las industrias de punta.

Los trabajadores estatales sujetos al Código Laboral se agrupan en sindicatos por institución y la mayor parte se encuentran adscritos a las centrales sindicales nacionales. Los empleados estatales sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa poseen su propia organización, que en varios casos se ha plegado a la movilización sindical, pero es manifiesta su debilidad para conseguir una posición clasista independiente. Sin embargo, valiéndose de una interpretación de la Constitución Política del Estado, se lucha por su sindicalización.

El grupo más homogéneo de trabajadores estatales son los maestros. Forman aproximadamente la tercera parte del empleo directo del Estado y presentan organización local, provincial y nacional. Los gremios de maestros tradicionalmente han sido disputados por los partidos de izquierda de origen universitario. Desde hace varios años son fuente para el reclutamiento de militantes del Movimiento Popular Democrático (maoísta) y siguen sus directivas de constitución sindical fuera del FUT. No obstante, cambios en las orientaciones de las organizaciones

provinciales e iniciativas locales los han aproximado a las movilizaciones sindicales y a convergencias de base hacia una Central Unica de Trabajadores. Las movilizaciones protagonizadas por la Unión Nacional de Educadores (UNE) logran un alto grado de combatividad y oposición al Estado. En varios casos tienden a prolongarse y, por esta vía, involucran a otros actores urbanos que se polarizan con la movilización.

En la segunda mitad de la década del sesenta y los primeros años de la del setenta, los estudiantes fueron los portavoces más radicales de las demandas populares. Los partidos políticos de izquierda habían constituido a las universidades en las fuentes tradicionales de aprovisionamiento de militantes, que sustituía a buena parte del trabajo organizativo en el campo popular. La magnitud de la población con ocupación industrial era bastante pequeña y dado el libre ingreso en las universidades estatales, el tamaño de la población estudiantil fue y es superior a la clase obrera urbano-industrial.

Hasta inicios de los años '70 las movilizaciones estudiantiles fueron sustitutos de las populares; luego, los partidos que las organizaban y competían por su control se diversificaron y se desplazaron hacia la esfera sindical y en la actualidad, la acción estudiantil precede y, en varios casos, detona la movilización sindical y vecinal. También hacen las veces de válvulas de escape de comportamientos "anónimos" de sectores juveniles. Por último, reivindican la reproducción del sistema universitario, que en los últimos quince años, antes que aparato estatal reproductor de ideologías se ha convertido en mecanismo de movilidad social y de calificación intermedia que facilita la inserción laboral.

7. Un caso de excepción

Por último, cabe mencionar a la movilización nacionalista-estatal en ocasión del conflicto con Perú en el sitio "Paquisha", en 1981. Se produjo una articulación pluriclasista amplia, una disputa por apropiarse de la "cuestión nacional" entre los bloques sociales fundamentales, un liderazgo estatal de la movilización y de la demanda y la actualización de la "Historia Muerta" (1941) en los sectores subalternos que se evidenció como cohesionante del sistema político.

La movilización comprometió a todos los actores sociales y sujetos económicos; pero se diferenciaron las actitudes frente al conflicto bélico. Estas evidenciaron el modo como se entendía el problema nacional. Se desarrollaron creativas formas de organización y de respuesta al acontecimiento, algunas distintas de la tradicional canalización de intereses. En torno de ellas se produjo una correlación de fuerzas entre el movimiento popular y los sectores dominantes, que fue condicionada por el Estado. El resultado de la disputa fue la incapacidad del movimiento popular para transformar un planteamiento "nacionalista" en "nacional-

popular". Las medidas económicas que se adoptaron en ocasión del conflicto fueron —voluntariamente o no— inicio de una política económica neoliberal para el tratamiento de la crisis, situación que suscitó la respuesta del movimiento sindical.

En suma, las características específicas de la movilización fueron la temática, la participación del Estado, la dilusión de las formas de representación tradicionales, la transparencia con que articuló una situación histórica y las vertientes ideológicas que justificaron el acontecimiento.

C. Características y temas de los movimientos

1. Crisis y desplazamientos de las identidades de los subalternos

Lo más distante de sociedades heterogéneas como la del Ecuador es una sola forma de identidad social de los sectores subalternos. Su existencia "disgregada y discontinua" no encuentra solución superestructural en partidos que persiguen la representación uniclasista, ni en estructuras corporativas que enajenan partes de sus demandas, ni en el Estado, en tanto éste no sea una vía para alcanzar el autogobierno.

La precariedad de la clase obrera en la acumulación, por hallarse expuesta, por un lado, a una burguesía industrial dependiente de una gestión estatal de sustitución de importaciones, y, por otra, a procesos de tecnificación productiva que la desplazan, determina una reubicación ante subordinados y dominantes. La articulación con el capital es realizada a través de formas nuevas e inestables. En su horizonte se encuentra la imposible proletarianización masiva de la sociedad y la coexistencia necesaria y conflictiva con otros sectores subordinados y con el Estado.

Los obreros conocen su capacidad de presión coyuntural en puntos estratégicos del sistema de acumulación, pero perciben su fragilidad para rearmar un aparato productivo que no controlan. Desde esta posición son convocados como interlocutores de una transformación global de la sociedad; a su vez, la convocatoria tiende a asignarles roles de hegemonía desde "lo obrero" hacia las otras determinaciones de clase e identidades de los subalternos.

La clase obrera permite la continuidad del movimiento sindical. Más aun, despliega su sentido estratégico en la práctica misma de la movilización, en tanto conduce la dinámica interna de las huelgas nacionales de trabajadores. El componente de todas ellas es el paro de la producción. Es el punto mínimo de la huelga en el que intervienen, de modo más o menos masivo, el conjunto de los obreros urbano-industriales, primordialmente de la ciudad de Quito. De allí puede extenderse hacia un paro urbano o nacional y adquirir distintas significaciones tendiendo hacia la huelga política. Sin embargo, más allá del paro productivo, la

ampliación del arco de fuerzas sociales intervinientes implica también el desplazamiento de la identidad obrera hacia otras formas. En todo caso, la clase obrera movilizada actuando como "portavoz" o como "altavoz" de los sectores subalternos ha logrado arrebatar poder al sistema institucional. La devolución de este poder arrebatado por las calles ocurre en medio de la imposibilidad de generar una alternativa política o social. Esto nos plantea el problema de la representación del movimiento laboral en la política. Para comenzar por el final, el problema es que la representación estable del movimiento en la escena pasa actualmente por la legitimidad que consiga; es decir, la tematización de su práctica en el espacio del consenso y de la voluntad política de la masa.

La representación de los obreros en la política atraviesa una multitud de formas. Desde los partidos de la izquierda —todos llenos de planteamientos cercanos al obrerismo—, la representación se debería conseguir por traducción literal del poder sindical en político y, consiguientemente, la tarea básica sería el copamiento del mundo sindical. Desde el aparato sindical, la presencia política se conquista de tres modos: accediendo a la institucionalidad política —arena para el enfrentamiento o la negociación—; en la acción directa que, voluntariamente o no, deslegitima al sistema institucional; y bajo la mediación del sistema de partidos. Son formas que coexisten en la actualidad y bajo las cuales se presenta el movimiento sindical. Ahora bien, el protagonismo obrero dentro del movimiento sindical es arrebatado por otras formas de identidad subalterna en determinadas coyunturas. En otras, el protagonismo sindical dentro de las clases subalternas es arrebatado por la identidad ciudadana. Estos son aspectos de una contradicción imposible de resolver.

Junto a estas formas de acceso a la política —que nos hablan de la fragmentación y heterogeneidad de la clase obrera y en general del movimiento sindical— la falta de una vertebración temática es evidente. Conforme se acentuó la penetración del Estado en la vida social, la idea del socialismo se debilitó y, en grandes períodos, desapareció. Sin embargo, no fue sustituida por la idea de la democracia. Es, tal vez, el "poder sindical" la idea no verbalizada que atraviesa al movimiento y recoge la actual situación de crecimiento orgánico y expresión de reivindicaciones, también de otros actores. Actualmente es posible que las coordenadas para el movimiento sindical cambien, conforme el autoritarismo gubernamental se ocupe de sus manifestaciones.

En suma, el movimiento sindical no se identifica con el socialismo, ni con la democracia. A su vez, la sociedad no se identifica con la clase obrera, ni con el movimiento sindical. No se trata de un sindicalismo apolítico, sino de una crisis en la modalidad de establecer una relación política entre la sociedad, el Estado y el movimiento sindical.

A la conformación heterogénea del mercado laboral urbano-corres-

ponde un juego de desplazamiento de los actores sociales subalternos entre múltiples formas de identidad. La pregunta que usualmente se formulan los estrategas del movimiento sindical es: hasta dónde la movilización es obrera y dónde comienza la movilización urbana? No es posible una respuesta y la pregunta debe ser reformulada ya que el mismo sujeto social desplaza las formas de identidad en la protesta y los planos en los que desenvuelve su práctica.

La heterogeneidad del movimiento sindical y la heterogeneidad de contradicciones urbanas y de sujetos sociales territorialmente ubicados no son las mismas. Corresponden a planos distintos de las relaciones entre el Estado, el capital y los sectores subalternos. Mientras el movimiento sindical genera formas de crecimiento orgánico en su respuesta al capital y al Estado, la barriada acumula imperceptiblemente descontento y genera formas de "explosión social". Ahora bien, en general, los dos se definen por su carácter "reactivo" contra la política estatal, pero con diferencias en los planos de focalización de la demanda y de técnica de lucha en el interior de una misma forma.

La superposición de diversos sistemas de contradicciones en la vida barrial es un acontecimiento por demás estudiado. Un mero listado nos permite acercarnos al objeto de nuestra discusión. Por un lado, la reproducción de los sujetos y problemas de la sociedad global; las relaciones de opresión de la ciudad sobre sus barrios —que implica el conflicto entre alternativas del capital para asignar una función a las ciudades en la reproducción del conjunto del sistema productivo y la ciudadanía—, y los conflictos por la reproducción de la fuerza de trabajo y las políticas estatales que lo operativizan. Por otro lado, las formas a través de las cuales se constituye un "subsistema político" desde el interior del barrio —con sus temas sociales y problemáticas específicas—, y las formas opresivas y despóticas que se constituyen alrededor de esa "institucionalidad barrial".

En este sentido, el barrio y la ciudad son instancias en las que se despliega el mayor número de formas de identidad de lo popular, que antes se mantenían en estado latente. ¿Por qué el barrio es un articulador de identidades? Para encontrar una explicación estructural debe indagarse en el carácter globalmente terciario de la sociedad y en la función de la red urbana como reproductora de la globalidad de este funcionamiento. Más allá, en el plano de la ideología y la política, la respuesta puede encontrarse en la poca permeabilidad del sistema institucional nacional, que no permite abrir las múltiples conflictividades que estructuran los sujetos populares.

Sin embargo, el movimiento vecinal, como las otras formas germinales que aloja —femenino, jóvenes— no aparecen en la superficie de la escena política y de la sociedad como conjunto. Son formas afectadas de "invisibilidad" en tanto reivindicaciones específicas, pero articuladas

por el consumo, la reproducción y la inserción al mercado de trabajo. En este plano se plantean las vinculaciones entre el barrio y el movimiento sindical.

Las plataformas del movimiento sindical manejan muchas dicotomías. Una importante es el juego entre salarios y precios que, a su modo, traduce los desplazamientos de los mismos sujetos entre la producción y la reproducción, sin una inserción que los identifique prioritariamente ante la sociedad. La fábrica no es un organizador del espacio en la sociedad ecuatoriana,²⁸ la crisis ha reforzado las estrategias de supervivencia y redes de ayuda de los obreros industriales²⁹ y la presencia de un Estado centralizador de renta desplazan las reivindicaciones populares, fundamentalmente hacia lo espacial.

Las plataformas del FUT tratan de insertarse en la coyuntura guiadas por una visión cerrada del orden político. Así, se devalúa su carácter estratégico y a sus demandas se las percibe inmediatistas. Su acercamiento a las reivindicaciones externas al mundo sindical no pasa de agregar nuevos puntos a un esquema predefinido. En suma, la proletarianización y la conflictividad —desde el espacio y desde otras categorías organizativas de la sociedad— cuestionan la representatividad del FUT. Más aun, en un nivel, éste reprime la creatividad que pueda tener el cuestionamiento del poder desde fuera de sus marcos.

Las reivindicaciones populares que se desplazan fuera del mercado laboral evidencian la trama constitutiva de la vida social de los actores. En este plano, la sociedad se dirige a la rápida desproletarianización y al levantamiento de nuevas formas de identidad. ¿Qué se plantean y hacia dónde se dirigen estas identidades? Analicemos el estereotipo obrero.

La visión cerrada del objetivo político, aquella que debería guiar la producción de un acontecimiento fundamental —el socialismo—, nos plantea la proletarianización en el mercado laboral como hecho económico o condición objetiva material desde la cual, por extensión, progresivamente se lograría introducir una conciencia política. El movimiento social, en consonancia, es entendido como etapa prepolítica. La política es una forma superestructural del hecho objetivo, la proletarianización económica. El resto del discurso es por demás concocido.

La primera respuesta a la posición reseñada es que en el horizonte de una sociedad como la ecuatoriana no está la proletarianización masiva como hecho productivo. Antes bien, la característica de su vida social es la multiplicación de las identidades de agrupamientos sociales. Pobladores, mujeres, jóvenes, indígenas, regiones, etcétera, se constituyen bajo otros parámetros de política e interpelación del poder. Su espacio en la vida social es lo que está en juego. Miran hacia adentro de las relaciones que los constituyen y cuestionan al sistema político, ya que no reconocen la especificidad de su conflicto.

Entre estas identidades cuya vocación es un orden abierto se crean

redes de parentesco. Tal vez la más importante es la construcción de un colectivo popular que redefine constantemente sus objetivos en la acción. Esta práctica fractura eficazmente la cara restrictiva de la institucionalidad política. Las identidades en gestación van dotándose de nuevas formas de entender y cuestionar al Estado, no desde el poder que éste ejerce, sino desde la construcción de un poder social. En este plano se ubica su objetivo y su imagen es la de una sociedad opcional, más no de reemplazo estatal.

2. *¿Qué movimientos sociales son posibles en una sociedad terciaria?*

El paradigma de la conflictividad organizada por la clase obrera se debilita ahora en el Ecuador. Durante algún tiempo y casi sin cuestionamiento, el corolario de la disputa sobre el carácter de la formación social fue un sujeto soporte de su destrucción o reemplazo. Igual estructura deductiva funcionó con la industrialización. Casi sin indagar sobre la naturaleza del fenómeno se planteó la expansión y generalización de sus relaciones económicas y de capital.

La imagen de una proletarianización urbano-industrial creciente de la fuerza laboral carece de fundamento empírico. Actualmente se cuestiona la asociación directa e inmediata entre la existencia de los obreros y su rol estratégico. Por un lado en la realidad se ha profundizado el capitalismo no con el desarrollo sectorial masivo de la industria, sino asentado en la regeneración de actividades primario-exportadoras y comerciales, y sujetas a la lógica del capital financiero. Por otro lado, se percibe la heterogeneidad interna de los obreros y el desplazamiento de su identidad hacia lo espacial y hacia lo estatal.

La proletarianización inestable es la característica central del mercado laboral. Se reconoce el acceso temporal al salario como un ingreso importante de los pobladores urbanos³⁰ y, simultáneamente, se pondera el rol de salario en la reproducción de la fuerza laboral, particularmente de los obreros industriales.³¹ También se indaga a la migración temporal para la obtención de ingresos monetarios vinculada a una estrategia de reproducción campesina.³² En conjunto, se relevan las paradojas de la constitución del mercado laboral, sin que implique la proletarianización de la vida social.

¿Qué se constata ahora en el capitalismo ecuatoriano frente a su situación previa? Las tendencias en la conformación de los agrupamientos sociales, que presionan en muy diversos sentidos. Por un lado, la proletarianización no es homogénea ni profunda. Más aun, podría plantearse que existen diversos "planos de proletarianización" cuyo elemento común es su carácter relativo y la urbanización acelerada, sin que responda linealmente a nuevos patrones de empleo y de crecimiento del capital.

Por otro lado, las políticas estatales hacia el sector agropecuario

han creado dos situaciones: una masa inmensa de campesinos productores de la mayor parte de la canasta básica, y un crecimiento empresarial que no impuso la proletarianización profunda de la fuerza de trabajo disponible.

La cuestión que se deriva es: qué tipo de sociedad política puede estructurarse sobre la base de la reproducción permanente de una sociedad de carácter terciario; se plantea entonces, la imposibilidad de una conformación plenamente ciudadana del sistema partidario y de una forma orgánica, estable y continua del movimiento social, en correspondencia con los sujetos que lo conforman.

Dado este contexto, no caben varias de las preguntas realizadas para los movimientos sociales de los países desarrollados, como por ejemplo la pregunta por la permanencia y continuidad del movimiento social. Estamos frente a una situación de aparición esporádica, cuya constitución no es lineal ni uniforme. La dinámica de la conflictividad será permanentemente heterogénea (muchos movimientos referidos a diversas situaciones) y los puntos de aplicación en el sistema político serán los más variados.

¿Qué es lo productivo y cuál es su rol bajo estas características de sociedad? Para repreguntarnos acerca de lo productivo debemos alejarnos de una perspectiva "obrerista" acerca del papel de la clase. Por un lado, la reflexión debe flexibilizar la frontera entre las esferas de la producción y reproducción; entre el mercado laboral y el espacio. Por otro lado, se debe revalorar a otras conflictividades sociales.

La función decisiva de lo espacial y de lo estatal en la vida social de los sectores subalternos nace en el rol de la reproducción. Se trata de un proceso de valorización basado en la remuneración por debajo del valor de cambio de la fuerza de trabajo³³ y en la intervención estatal en la generación de nuevos actores sociales y conflictividades.

El proceso de creación de valor en nuestras sociedades se define más bien como un hecho individual que colectivo. Más aun, se podría pensar que lo colectivo y lo productivo tienen otra significación que la acepción tradicional en el capital industrial. El espacio y la función global de la ciudad y de las regiones lo acotan, adquiriendo funciones de creación de valor y estructuración de lo colectivo.

¿Cuáles son los ámbitos y lógicas del enfrentamiento social? El capital controla decisivamente la estructura económica formal, la que sin embargo no puede extenderlo hacia el conjunto de la vida social. En ésta actúan redes estatales invisibles que encarnan al capital, pero que están sobredeterminadas por la política. Así, no existe control estricto del capital en lo espacial y la presencia estatal se define también como espacio de enfrentamiento. Igual relación puede observarse en la familia y las regiones. Los nuevos movimientos son respuestas a estos espacios para la conflictividad.

El espacio, la familia, las cuestiones étnicas y la conformación regional, que usualmente son concebidos como condiciones de reproducción de un capital productivo urbano-industrial, deben ser redefinidos a la luz de los movimientos sociales que alojan.

3. La penetración del Estado en la sociedad civil y los movimientos

Las movilizaciones que tienen antecedentes más profundos en la historia —campesinos e indígenas, sociedades regionales e incluso obreros— se orientaban prioritariamente contra su antagonista inmediato. Así, la lucha en el interior de la hacienda serrana tenía formas específicas de asedio a los recursos y a la estructura de dominación personificada en agentes concretos —el cura, el terrateniente y el teniente político—; generaba y procesaba la conflictividad y sólo incipientemente rozaba las formas estatales nacionales. El Estado existía como estas formas locales, la dimensión de sus aparatos nacionales era reducida y la dinámica de la lucha de clases era el antagonismo directo.

Las movilizaciones regionales de más amplios alcances tendían a la disputa por la ocupación del aparato de un "Estado terrateniente",³⁴ cuya característica básica fue la fragmentación. En este sentido, la cuestión de la formación nacional no estuvo plenamente en juego hasta los años '60 y los conflictos inter e intrarregionales sustituían al enfrentamiento por la mediación estatal. A su vez, los primeros conflictos obreros que han podido ser reconstituídos muestran una dinámica dentro de los linderos de la fábrica, en que el Estado no aparece como referente.

En suma, bajo esta forma de la conflictividad social se asentó el "compromiso" como vía de la política ecuatoriana hasta los años '60.

Las movilizaciones de los diferentes actores dejan de ser acontecimientos y progresivamente adquieren dimensión nacional y referente, en la medida en que el Estado penetra a la sociedad civil y organiza el sistema político. Primero, el Estado actuó (re) constituyendo decisivamente a los actores; segundo, éstos se vinculan al capital a través del Estado y, tercero, la democratización asume desde el Estado la tematización de una serie de "cuestiones sociales" que funcionan como gérmenes de movilizaciones.

La clase obrera y la burguesía industrial emergen del proceso de sustitución de importaciones, el cual económicamente se sustenta en el excedente y en la normatividad estatales. Socialmente se constituyen como corporaciones eficaces en la escena por un proyecto "reformista" de reorganización de la economía. Políticamente, son demandantes de un espacio en el sistema representativo. Ahora bien, de este proceso no sigue necesariamente una conclusión acerca de la "dependencia" de la organización y la movilización sindicales del Estado, ni de la actitud que adopte la burguesía industrial, ni de ningún otro agente externo. Más

bien, se trata de problematizar el tipo de vinculaciones entre sociedad civil y Estado, que plantean a la hegemonía y a la correlación de fuerzas como condicionantes de la evolución social. La simultaneidad de la acción directa y de la delegación de la representación se constituyen en formas necesarias de la política en estas condiciones.

El movimiento sindical ha tenido diferentes ópticas acerca del Estado. En 1971 se planteaba como instancia sustitutiva del partido e imaginaba a su plataforma como un nuevo régimen. Para entonces el movimiento era débil y su presentación ideológica era de la intelectualidad de izquierda, antes que propia. Luego, desde 1975, el movimiento sindical encara al Estado en tanto agente de distribución de recursos y no a partir de un cuestionamiento de la globalidad del poder. En la base de esta percepción se encuentran el carácter del Estado como constitutor de las relaciones sociales y distribuidor del excedente de que dispone; el debilitamiento de la idea del socialismo como imagen de la sociedad y su conversión en radicalidad reivindicativa; el copamiento del sindicalismo por los partidos de izquierda que se plantean como vía de acceso a la política; y, la formación de un "poder sindical" que se escinde del poder político.

No obstante, la crisis ha impuesto criterios al movimiento sindical. No sólo el parcial abandono de la concepción del Estado como asignador de recursos sino también el esbozo de interpelaciones alrededor de lo nacional, lo popular y lo democrático frente al Estado, la fortificación de la sociedad civil como condición de eficacia y la preliminar revaloración de nuevos temas de otros agrupamientos y conflictividades sociales.

También la democracia ha impuesto criterios de realidad al movimiento sindical. Si inicialmente se pensaba que al cambio de políticas estatales correspondían reacciones inmediatas de sectores populares, ahora se plantea la necesidad de legitimar la movilización popular, no sólo frente a la coyuntura sino hacia el mediano plazo. También se ha impuesto una relación con el Parlamento y los partidos políticos. También en el reconocimiento de su debilidad —y el vacío de representación que se provoca cuando se enfrentan directamente con el Ejecutivo o cuando se salen de la escena— se le ha otorgado funciones.

4. El orden de la democracia

La democracia actúa sobre los movimientos sociales en dos sentidos. Por un lado, como creadora de un "orden" para el planteamiento de las demandas y, por otro lado, como código organizador de su alcance.

Los movimientos se ubican frente a la democracia desde tiempos sociales y políticos específicos. La democracia es entendida como espacio en el que pueden acelerar y profundizar la demanda y tiene como punto de residencia fundamental al Estado.

Existe una interacción entre los movimientos sociales y la democracia. En la coyuntura de transición a la democracia en el Ecuador se desplegaron el mayor número y variedad de movilizaciones, prácticas que constituyeron identidades. También las reivindicaciones consideradas como legítimas se exacerbaron, en consonancia con la búsqueda de legitimidad de la democracia y del sistema partidario.

La formalidad democrática levanta derechos y crea otros nuevos en relación con cada sujeto social. El movimiento urbano la ejemplifica: se multiplicaron las organizaciones y se expandió el ámbito de la legitimidad de las demandas. Dicho concretamente, se multiplicaron las organizaciones porque fue factible alcanzar la tierra, ensanchando en lo cotidiano la legalidad (los municipios son un ejemplo de ello) y se logró mayor legitimidad en las demandas, aunque fuera por vínculos clientelares (la aceptación de la demanda en períodos electorales y la posibilidad de presión posterior).

La inexistencia de órdenes estatales favorece la constitución de nuevas identidades. Es el caso de los grupos étnico-culturales, que pueden plantear sus reivindicaciones desde una óptica estratégica, ya que no existe una legalidad previa que los identifique como interlocutores específicos y los circunscriba.

La articulación de los movimientos regional y sindical se basa en una constante. Cuando el movimiento sindical se encuentra en primer lugar de la escena, el movimiento regional se repliega; y cuando la movilización sindical decae, la reivindicación regional reaparece. Esta articulación objetiva de los movimientos ha sido posible por la existencia de un escenario en el que resuenan las demandas, al que se accede desde el exterior.

El Estado como punto de residencia de la democracia delimita a la legalidad. Los movimientos sindical y campesino han sido fuertemente afectados por esta situación.

Por un lado, se trató de deslegitimar al movimiento social oponiéndolo a la representación electoral. Por otro lado, se introdujo una escisión entre la acción del movimiento social y su legitimidad. Sus demandas estarían condicionadas a la viabilidad económica estatal y a la conflictividad que el movimiento pueda exhibir.

De hecho, una faceta del sistema partidario también actúa como agente estatal en la democracia. En varias situaciones se imputa al movimiento sindical un carácter antiinstitucional y, consiguientemente, ilegítimo.

No obstante esta faceta de los partidos, los movimientos también delegan representación en el sistema y buscan legitimidad, lo que les ha permitido dos situaciones favorables: problematizar la aceptación social de la movilización y enfrentar al Estado en el plano de la legiti-

dad. También han obligado al sistema partidario a tener como referente a la sociedad civil.

5. *¿Uno o varios universales?*

¿Quién y qué define el interés global de una sociedad y, consiguientemente, la oposición entre la universalidad y el particularismo? La tradicional respuesta estuvo asociada a la hegemonía de la industrialización y al enfrentamiento de sus factores fundamentales. En sociedades de débil desarrollo, la proposición básica fue forzar un proceso homogeneizador económico con la industrialización y socialmente reducir o eliminar la fragmentación de la sociedad, reconstruyendo la unidad en la colectividad obrera.

Las posiciones rectoras de la unidad —en tanto portadoras supuestas de los intereses universales de la sociedad— devienen en cooperación y eliminación de las identidades. Frente a ellas, la práctica de los movimientos sociales crea bases de órdenes abiertos, desde los cuales se puedan diseñar y construir estilos opcionales de organización social.

En el Ecuador, entre el sistema partidario y los movimientos sociales existe una tensión por el acceso a la política. En los diversos momentos de la coyuntura de instalación democrática se plantearon varias modalidades: articulación orgánica a través de una relación política, competencia por la representación, en la que el movimiento recupera para sí parte de las formas delegadas, y deslegitimación del sistema representativo a través de la explosión social. En suma, el destino de esta articulación parece ser la coexistencia permanente. Uno y otro se basan en identidades que no pueden encontrar (y no cabe que encuentren) homogeneidad superestructural.

Esta tensión tiene fundamentos objetivos. Los movimientos sociales despliegan atributos no siempre concordantes con el sentido de la resolución de la contradicción principal. Pueden empujar, incluso, por equívocas salidas de la coyuntura. No obstante, esto muestra que la idea de "hegemonía como paso previo al socialismo" también supone el desarrollo y explicitación de toda la conflictividad subyacente; y que la sociedad opcional debe basarse en sistemas de procesamiento de las contradicciones siempre abiertos.

Los movimientos sociales del Ecuador actual demandan como perspectiva su reconocimiento en el sistema: la construcción de su identidad social y política. De este modo, la demanda es su viabilidad como agrupamiento social y no su negación. En unos casos, se trata de su futuro de clase y en otros, del reconocimiento de su identidad. La idea de universalidad correspondiente no es la dilución de sus identidades, sino un sistema político capaz de acoger las diferencias. En el horizonte estratégico de esas demandas no se encuentra un sujeto social mayoritario, ho-

mogenezador de la sociedad futura. De este modo, hizo crisis la idea de un socialismo uniformizador.

Dos casos ejemplifican esta situación. Por un lado, el movimiento femenino (ista) que, en una de sus vertientes, se sustrae de hacer proposiciones globales acerca de la sociedad y cuestiona la frontera entre lo público y lo privado. Plantea la constitución de un "nosotras" (a través de muchas formas organizativas) y la lectura de la sociedad desde un punto de vista de género. Así, su intelección del socialismo no es la reproducción de una opresión de género. Impulsa la aceptación de sus intereses como óptica global para entender las opresiones capitalistas.

Por otro lado, los movimientos étnico-culturales plantean el conflicto por la multinacionalidad del Estado en el largo plazo. Ante los requerimientos por la inserción en los conflictos nacionales inmediatos, manifiestan su desconfianza y responden con un discurso estratégico acerca de sus intereses. La idea del "poder del Estado" actual les es ajena, en el sentido de que no constituye garantía para la realización de su identidad. No obstante, garantizan su autonomía en el acceso a la toma y gestión de las decisiones.

La articulación necesaria entre los escenarios de la lucha social, en que los movimientos se preocupan por la defensa de la opresión dominante y el reconocimiento de su capacidad de autodeterminación y los partidos, como portadores de imágenes de futuro y de la voluntad de mayorías, definen una "dialéctica perversa".³⁵ Esta situación obliga al diseño y proposición de un sistema político de respeto a las autonomías, en el que coexisten varios colectivos articulados y no un uniformizador de la sociedad. Para (re) pensar en el desarrollo de las facetas progresistas de las democracias actuales (levantar las facetas no desgastadas por una práctica formal y, en no pocos casos, opresiva), es preciso articular en un solo sistema político los movimientos sociales y los partidos como acceso a la política.

Los partidos deben recoger lo nuevo de la sociedad civil sin una codificación que negocie las demandas en aras de una "universidad", y los movimientos deben concertar su demanda en el interior de un sistema orgánico de procesamiento de conflictos. No se trata de rebajar la conflictividad, sino de procesarla hacia futuro, rompiendo la sectorización impuesta por la forma capitalista de funcionamiento social.

La tensión entre movimientos y partidos es la garantía de un funcionamiento democrático de la sociedad. El Estado no puede ser sólo la preocupación centralizadora del poder: pueden coexistir diferencias para su acercamiento, conceptualización y cuestionamiento. La universalidad y el particularismo no son parejas imputables a la falta de conciencia de movimiento social y a la debilidad de la vanguardia. Son invisibles redes estatales las que provocan este orden de escenarios, que no pueden

ser superados voluntariamente, sino tratados desde el lugar en que está procesándose lo nuevo.

Notas

¹ Larrea, Carlos, *Empresas transnacionales y exportación bananera en el Ecuador (1948-1972): un ensayo interpretativo*, FLACSO, 1980.

² Larrea, Carlos, *La estructura social ecuatoriana entre 1950 y 1979*, Nueva Historia Ecuatoriana, 1985. (Próxima publicación)

³ Chiriboga, Manuel, "El sistema alimentario ecuatoriano: análisis y alternativas", CEPAL-FAO, 1985; "Crisis y movimiento campesino e indígena", UNU/CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

⁴ Chiriboga, Manuel, "Campesinado andino y estrategias de empleo: el caso de Salcedo", en *Estrategias de Supervivencia en la comunidad Andina*, CAAP, 1984.

⁵ Pérez, Juan Pablo, *Clase obrera y democracia en el Ecuador*, FLACSO, 1984. (Próxima publicación)

⁶ León, Jorge y Pérez, Juan Pablo, *Crisis y movimiento sindical en el Ecuador: las huelgas nacionales del Frente Unitario de Trabajadores (1981-1983)*, UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

⁷ *Ibíd.*

⁸ *Ibíd.*

⁹ *Ibíd.*

¹⁰ Uнда, Mario, *La organización barrial entre la democracia y la crisis*, UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

¹¹ *Ibíd.*

¹² *Ibíd.*

¹³ Prieto, Mercedes, *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador*, UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ Pachano, Simón, *Movimientos sociales regionales en el Ecuador*, UNU-CLACSO, 1985. (Próxima publicación)

¹⁷ *Ibíd.*

¹⁸ *Ibíd.*

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ *Ibíd.*

²¹ Prieto, Mercedes, "Haciendas estatales: un caso de ofensiva campesina", en *Ecuador: cambios en el agro serrano*, FLACSO-CEPLAES, 1980.

²² Guerrero, Andrés, *Haciendas, capital y lucha de clases andina*, El Conejo, 1983.

²³ Velasco, Fernando, *Reforma agraria y movimiento campesino indígena de la sierra*, El Conejo, 1979.

²⁴ Chiriboga, Manuel, obras citadas.

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ *Ibíd.*

²⁷ Cerrión, Fernando, *Crisis urbana y organización territorial en Quito-Ecuador*, CIUDAD, 1985. (Inédito)

²⁸ Pérez, Juan Pablo, *Entre la fábrica y la ciudad*, FLACSO-ILDIS, 1985. (Próxima publicación)

²⁹ García, Jorge, y otros, *Las organizaciones de moradores en los barrios populares de Quito*, CIUDAD, 1984.

³⁰ Pérez, Juan Pablo, *ob. cit.*, 1985.

³¹ Chiriboga, Manuel, *ob. cit.*, 1984.

³² Pérez, Juan Pablo, *ob. cit.*, 1985.

³³ Quintero, Rafael, *El Estado terrateniente de los Andes*, FLACSO, 1984.

³⁴ Laclau, Ernesto, *Ciclo de conferencias Universidad de York*, 1984.

³⁵ Cardoso, Fernando, "La democracia en las sociedades contemporáneas", en *Crítica & Utopía* núm. 6, CLACSO, Buenos Aires, 1983, s/f.